



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: JOHN WEIMAR GONZÁLEZ SOTO
Demandado: ACP COLPENSIONES
Radicado: 05001 31 05 015 2021 00205 01
Sentencia: S-061

AUTO

Se accede a la sustitución de poder presentada por el apoderado judicial de COLPENSIONES, Dr. RICHARD GIOVANNY SUÁREZ TORRES, a favor de la Dra. LILIANA CHAVES ORTEGA, quien se identifica con T.P. N° 303.709 del C. S. de la Judicatura; en consecuencia, se le reconoce personería judicial para actuar en los mismos términos que al apoderado principal con efectos desde el momento mismo de la presentación del memorial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín el día 20 de mayo de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

JOHN WEIMAR GONZÁLEZ SOTO demandó a COLPENSIONES, para que sea condenada al reconocimiento y pago del retroactivo de su pensión de invalidez entre el 28 de mayo de 2018 y el 31 de octubre de 2020, con los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, la indexación y las costas del proceso.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que tiene 32 años de edad y se encuentra afiliado a la ACP COLPENSIONES desde el año 2007; que tiene cotizadas un total de 182.57 semanas de cotización; que en 2018 fue diagnosticado, entre otras cosas, con ENFERMEDAD CRÓNICA TERMINAL; que el 17 de octubre de 2018 el Departamento de Medicina Laboral de la demandada emitió dictamen a través del cual le determinó una pérdida de capacidad laboral de 73.71% con fecha de estructuración de mayo 28 de 2018; que el 7 de marzo de 2019 solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual fue negada por la entidad según Resolución SUB 139328 del 31 de mayo de 2019, confirmada a través de resolución del 2 de agosto de 2019, justificado en el hecho de acreditar 49 semanas de cotización; que interpuso acción de tutela ante el Juzgado Quinto de familia de Medellín, quien en primera instancia dispuso negar el amparo solicitado; que en segunda instancia se revocó la decisión y la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín ordenó a COLPENSIONES reconocer la pensión de invalidez reclamada; y que la entidad dio cumplimiento a ese fallo según Resolución SUB 209664 del 30 de septiembre de 2020 a partir del 1 de noviembre de ese mismo año.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES acepta el estado de invalidez del demandante, la afiliación a esa entidad y todo lo relacionado con las decisiones mediante las cuales se resuelve sobre la prestación solicitada, incluyendo el reconocimiento como consecuencia de la acción de tutela que con esa finalidad interpuso. Se opuso a las pretensiones de la demanda en tanto el reconocimiento de la pensión se produjo en cumplimiento de un fallo de tutela que no tuvo en consideración que el demandante no tenía cumplidos los requisitos de la Ley 860 de 2003 para acceder a la pensión de invalidez. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación de reconocer y pagar retroactivo de la pensión de invalidez, prescripción, compensación, buena fe e imposibilidad de condena en costas.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 20 de mayo de 2022, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín ABSOLVIÓ a COLPENSIONES de todas las pretensiones formuladas en su contra por el demandante, a quien condenó en costas, fijando como agencias en derecho la suma de \$500.000.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada del demandante interpuso recurso de apelación indicando que en el fallo de tutela que ordenó el reconocimiento de la pensión de invalidez, no se mencionó el retroactivo pensional al que tiene derecho. Agrega que cumple con todos los requisitos para acceder a dicho retroactivo toda vez que se dejó claro en los hechos y pretensiones de la demanda que previo a los requisitos exigidos en la Ley 860 de 2003 se pudo acreditar el 73.71% de pérdida de capacidad laboral con fecha de estructuración del 28 de mayo de 2018 y un total de 182.57 semanas cotizadas; así mismo, se

debe dejar claro que nunca tuvo incapacidades y que la pensión de invalidez de origen común contemplada en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 señala que se causa cuando el trabajador o afiliado pierde un 50% o más de la pérdida de capacidad laboral, requisito con el que cumple el demandante por lo que debe tenerse en cuenta la situación de debilidad manifiesta por su estado de salud y en consecuencia reconocérsele el retroactivo pensional a que tiene derecho.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, el apoderado del demandante presentó alegatos de conclusión a través de los cuales insiste en el reconocimiento de la pensión de invalidez desde el 28 de mayo de 2018.

COLPENSIONES hizo lo propio solicitando se confirme la sentencia de primera instancia, para lo cual reitera los argumentos expuestos al momento de contestar la demanda.

C O N S I D E R A C I O N E S :

Decide la Sala en ésta oportunidad la procedencia del reconocimiento del retroactivo de la pensión de invalidez del Sr. JOHN WEIMAR GONZÁLEZ SOTO entre el 28 de mayo de 2018 y el 31 de octubre de 2020, esto es, desde que fue estructurado su estado de invalidez y hasta el reconocimiento de la pensión, en tanto la parte demandante insiste en el recurso de apelación que la orden de tutela no estableció de manera concreta una fecha a partir de la cual debía hacerse ese reconocimiento.

Tal y como lo decidió la funcionaria de primer grado en su sentencia, la orden impartida mediante acción de tutela no incluyó una fecha a partir de la cual debía reconocerse la prestación, sin que exista ningún fundamento para ordenar el reconocimiento de la pensión desde el

momento mismo de la estructuración de la invalidez del señor GONZÁLEZ SOTO como pasará a verse.

Si se observan las diferentes Resoluciones en las cuales se analizó el derecho pensional del actor, la justificación para el reconocimiento pensional desde el 1 de noviembre de 2020 no se deriva de una orden precisa en ese sentido sino más bien del propio criterio de la entidad.

En el presente caso, no existe duda en cuanto que: i) el Sr. JOHN WEIMAR se presentó a reclamar pensión de invalidez el 7 de marzo de 2019; ii) fue calificado por Medicina Laboral de COLPENSIONES a través de la cual se determinó una pérdida de capacidad laboral de 73.71% con fecha de estructuración el 28 de mayo de 2018; iii) la entidad negó lo solicitado mediante las resoluciones SUB 139328 del 31 de mayo de 2019 y DPE 7281 del 2 de agosto de 2019 por el hecho de acreditar 49 semanas de cotización en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez; iv) mediante sentencia de tutela del 28 de septiembre de 2020, la Sala Quinta de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín dispuso conceder el amparo de los derechos fundamentales cuya protección se invocaba, dejando sin efectos las decisiones de COLPENSIONES y ordenándole expedir un nuevo acto administrativo reconociendo la pensión de invalidez del demandante.

La pensión de invalidez como tal se encuentra regulada en los artículos 38 y siguientes de la Ley 100 de 1993 y se reconoce a la persona que ha sido declarada invalida al habersele determinado una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Derecho que en los términos del art. 40 de la propia ley 100, surge desde la fecha en que se produzca el estado de invalidez.

Y aunque en principio o por regla general el disfrute de la pensión de invalidez comienza a partir de la fecha de estructuración, pueden ocurrir circunstancias consideradas como excepciones a dicha regla,

como por ejemplo, i) cuando con posterioridad a ese momento, el afiliado haya recibido algún subsidio por incapacidad, caso en el cual, y así se ha admitido en casos análogos, en cumplimiento de lo establecido en el art. 3° del Decreto 917 de 1999, en tanto expresamente prohíbe la posibilidad de recibir simultáneamente el subsidio por incapacidad y prestación económica alguna derivada del estado de invalidez, la pensión comenzará a pagarse con posterioridad al disfrute de esa incapacidad; o ii) cuando la orden de reconocimiento de la pensión de invalidez proviene de una acción de tutela en la que, a pesar de no acreditarse el cumplimiento de las exigencias mínimas, en aras de garantizar sus derechos fundamentales, se otorga la pensión bien sea por inaplicación de las normas legales o como en este caso, por una flexibilización de tales requisitos debido a la situación particular del accionante.

Además, como en esa orden de tutela no se estableció un punto de partida para el reconocimiento de la prestación, no podría la Sala adoptar una decisión contraria o complementar lo ya decidido.

En sentencia T-303 de 2020, la Corte Constitucional se ocupó de analizar una situación en la que se ordenó el reconocimiento de una pensión de invalidez sin el cumplimiento de los requisitos legales vigentes para la época de su estructuración, indicando que:

“... ya se ha señalado que, en condiciones normales, el reconocimiento de la pensión de invalidez, esto es, el derecho a acceder al beneficio pensional y recibir el pago por ese reconocimiento, se encuentra sujeto a la fecha en que se estructura la invalidez. La Ley 100 de 1993, en su artículo 40, dispone que “La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado”¹. Desde esa perspectiva, incluso aunque pudiera plantear dilemas su reconocimiento, no hay duda que el pago se daría desde el momento en que se origina la invalidez.

¹ Ley 100 de 1993. Artículo 40 –inciso final–.

Sin embargo, las sentencias SU-446 de 2016 y SU-556 de 2019 desarrollan una hipótesis excepcionalísima a este esquema general, ya que el régimen constitucional del Acuerdo 049 de 1990 pretende amparar la situación de las personas vulnerables que, sin cumplir con las condiciones de la norma vigente al momento de la estructuración de la invalidez, satisfacen los parámetros de la legislación de 1990. Como se ha visto, los individuos necesitarán acreditar, antes del 1° de abril de 1994, las circunstancias fijadas en el artículo 6° de dicha normatividad.

*Como toda excepción, debe ser interpretada restrictivamente y en todos los sentidos que se pueda especificar. Puntualmente, en lo que se refiere al pago de la prestación, el Tribunal expuso que, en los eventos que el juez constitucional reconozca la pensión de invalidez, las mesadas pensionales se pagarán a partir de la presentación de la tutela, ya que no tiene sentido, excluir la norma general para reconocer la pensión en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, y al mismo tiempo, pagarla, con soporte en las reglas ordinarias. Después de todo, al tratarse como una **circunstancia excepcional el reconocimiento de la pensión de invalidez a partir de las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, también, por consecutividad, sería excepcional su forma de pago.**"*

Lo mismo se puede considerar en este caso, en el que el reconocimiento de la pensión resulta excepcionalísimo debido a las circunstancias particulares del afiliado, omitiendo el hecho de que no tuviera cumplidos los requisitos legales, con lo que también se puede considerar que su pago no puede seguir la regla general que implica que deba hacerse desde la fecha de estructuración, sino, más, desde el momento en que se profiere la orden de tutela, como en efecto se hizo.

En consecuencia, la sentencia de primera instancia deberá ser confirmada.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, el día 20 de mayo de 2022.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0a372ff55aab4ae847e1b8fbe2f1c8f0f034a0dcae2f79bdc1fbd0ca116f26f6**

Documento generado en 16/03/2023 01:24:02 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>